

Diagnostico socioeconómico y cultural de las condiciones de la seguridad como aporte al Plan de Energización Rural Sostenible -PERS- ORINOQUÍA, y sus efectos en el mantenimiento rural en el departamento de Arauca.

Autores

Yorlan Felipe Aguirre Viazus

Brayan Alexander Perico Roldán

Universidad de los Llanos
Facultad de Ciencias Económicas
Programa de Economía
Villavicencio 2016

Tabla de Contenido

1. Presentación	3
2. Planteamiento del problema	4
3. Justificación	9
4. Objetivos	10
5. Marco teórico	11
6. Diseño metodológico	19
7. Cronograma	21
8. Presupuesto	22
9. Productos a entregar	23
10. Referencias	24

Presentación

La presente propuesta de pasantía se enfoca en el criterio de *Seguridad y mantenimiento de ruralidad* en el marco del Plan de Energización Rural Sostenible-PERS-ORINOQUIA para el desarrollo rural productivo en el departamento de Arauca, el cual se estructura en cinco dimensiones: económica, tecnológica, sociocultural, ambiental y biofísica, haciendo énfasis en la dimensión económica y sociocultural que establece el valor a las condiciones económicas, sociales y culturales y su influencia sobre el desarrollo del territorio. Dentro de estas dimensiones, se encuentra definido el criterio de Seguridad y mantenimiento de ruralidad objeto de la investigación, que hace referencia al orden social y económico en el ámbito rural para promover una convivencia pacífica que ayude a la superación de los desequilibrios sociales, económicos, institucionales en el mantenimiento del medio rural y el territorio poblado.

La metodología empleada se establece en el estudio Evaluación de tierras para planificar el uso del suelo Y la producción, escala 1:25000, en la parte plana de los municipios de Puerto Gaitán– Meta– y Santa Rosalía – Vichada – realizado por la Dirección de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria -Universidad Nacional de Colombia, que consiste en realizar un proceso analítico jerárquico o AHP (por sus siglas en inglés) la cual prioriza, a partir de unos criterios y niveles, los problemas de mayor relevancia y a los cuales se debe dar solución primordial. Con lo anterior, se propone caracterizar la seguridad y el mantenimiento de la ruralidad del departamento de Arauca como aporte para la construcción del Plan de Energización Rural Sostenible –PERS- Orinoquia, que permita ligar energía con productividad, desarrollo empresarial comunitario e incrementar el nivel de vida de las regiones más apartadas.

Como finalidad, el trabajo a realizar pretende determinar los factores y actores que influyen en la seguridad rural y al mismo tiempo, en el mantenimiento de la estructura sociocultural y económica del área rural del departamento de Arauca, por medio de fuentes de información secundarias y a partir de la construcción de un indicador que permita identificar la influencia de estos factores en las apuestas productivas del territorio.

Planteamiento del problema

El objeto de estudio de esta investigación es la seguridad y el mantenimiento de la ruralidad definido como el sostenimiento del territorio rural, lo cual se refiere al orden social en el ámbito rural que promueve una convivencia pacífica que ayude a la superación de desequilibrios sociales, económicos e institucionales. A su vez, mejorar las condiciones de la cadena agro-productiva-comercial en el territorio.

Un obstáculo constante para la seguridad y el mantenimiento de la ruralidad en Colombia, es el conflicto armado, siendo el de mayor duración de Latinoamérica, con más de cinco décadas y cinco millones de desplazados internos, tal como lo afirma la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (2016) en su página web para Colombia “Desde 1997 al 1 de diciembre de 2013 han sido registradas oficialmente 5.185.406 personas desplazadas internas...”, donde las áreas más afectadas han sido principalmente las rurales.

Este conflicto ha tenido varios efectos en la seguridad, por ejemplo: secuestros, violencia, homicidios, desplazamiento interno, atentados, control sobre territorios, reclutamiento de menores, redes de narcotráfico, lavado de activos, entre otros aspectos, que atenta directamente la ruralidad y su mantenimiento, debido a que deteriora el tejido social al romper el vínculo entre una comunidad y su entorno rural, al igual que destruye su identidad como comunidad rural. Esto dificulta el desarrollo del campo y la ejecución de políticas sociales y económicas que incentiven el aparato productivo y el sentido social de la región afectada.

De igual manera la presencia de grupos armados ilegales ha modificado la dinámica social, cultural y económica de la población, alterando las relaciones sociales de producción y generando impactos multidimensionales tales como: desplazamiento forzado, reducción del capital humano, distribución poblacional en el territorio, migraciones, conflictos en la tenencia de la tierra, cambios en las actividades económicas y pérdida de identidad cultural en la población, como lo reiteran Sánchez & Díaz (2005) desde una perspectiva socioeconómica del conflicto:

Existen consecuencias a nivel microeconómico como las pérdidas de capital humano por la violencia homicida, las fugas de capital humano, la deserción e inasistencia escolar; las pérdidas de capital social por el desplazamiento forzoso, menor participación en la fuerza laboral; y demás efectos colaterales como la destrucción de la cohesión social, el aumento de

los costos de transacción (costos de transporte), deterioro institucional, corrupción, la congestión judicial y menor participación política (p. 5).

La solución implementada por el Estado en aquellos territorios afectados por el conflicto armado como respuesta a los anteriores problemas mencionados, ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad militar principalmente en contra de los grupos armados ilegales promoviéndose desde las políticas nacionales y buscando consolidar la estabilidad en estos territorios, y así dar paso al crecimiento, el desarrollo económico y la seguridad ciudadana. Por esto, el Estado se enfoca primeramente en el orden público y el control de las actividades de los grupos armados ilegales en las áreas rurales.

En los escenarios rurales en materia de seguridad, el Estado ha puesto un énfasis especial en la lucha contra los grupos armados al margen de la ley (seguridad nacional). Por ese motivo, en estos contextos la seguridad se asimila con el control militar, mientras que las problemáticas de seguridad y convivencia que afronta la ciudadanía en su vida cotidiana no reciben la misma atención por parte de las autoridades (Bulla & Guarín, 2015, pág. 3).

En consecuencia, el Estado en el marco rural, en temas de seguridad se enfoca primeramente en la seguridad pública, es decir, en el control militar del área y deja en segundo plano temas como la seguridad ciudadana, los problemas cotidianos de la ciudadanía, su protección y la consolidación de un orden social estable.

El servicio de seguridad ciudadana que brinda el Estado en Colombia es desigual. Se concentra principalmente en las grandes ciudades y en las cabeceras municipales, pero está ausente en vastas extensiones de la geografía nacional. En estas regiones resulta doloroso evidenciar la incapacidad estatal para hacer cumplir la ley, para tramitar los conflictos de la ciudadanía y para proteger y promover un orden social basado en pautas de convivencia pacífica (Bulla & Guarín, 2015, pág. 3).

Con todo esto, el Estado destina más recursos para mantener la seguridad pública, debido a la presencia de grupos armados ilegales que son vistos como principal obstáculo para el desarrollo y el crecimiento de estas áreas. Para comprender mejor lo anterior, un estudio mencionado por la Revista Semana (2012) sobre los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), sostiene que, para 2010, las naciones que más recursos destinaron para la defensa frente al Producto Interno Bruto (PIB), fueron Ecuador (2,74%),

seguido por Colombia (1,89%) y tercero Surinam (1,49%) (párr. 7) evidenciando a Colombia como el segundo país que invierte gran parte de su PIB para el combate con los grupos armados ilegales.

Adicionalmente, los grupos armados se financian de actividades ilegales como: el contrabando, el narcotráfico, las extorsiones a la población civil y al sector empresarial de las regiones afectadas por su presencia, afectando el normal desarrollo de las actividades económicas de cada región donde operan. Dado que estos actores propician la violencia, la inseguridad, la inestabilidad económica y jurídica, generan incertidumbre a las inversiones privadas, percibiendo entre los inversionistas como lugar riesgoso para hacer negocios las zonas afectadas por el conflicto.

Según Porter (El País, 2014) experto en competitividad de la Universidad de Harvard en una corta rueda de prensa en el centro de eventos Valle del Pacífico dijo “Creo que el conflicto armado en Colombia ha sido la principal causa de la destrucción económica del país. También ha destruido la prosperidad social” explicando que el conflicto armado es el principal obstáculo del país para su prosperidad social y económica, en especial los Departamentos que tienen mayor presencia del conflicto. En el objeto de estudio de este informe, se abordará la particularidad del departamento de Arauca que para su plan regional de competitividad se referencia explícitamente al tema de la paz como aspecto fundamental para su desarrollo siendo un factor indispensable para la consolidación y el progreso de su sector productivo y sus apuestas productivas para el futuro competitivo (Gobernación de Arauca; Comisión Regional de Competitividad de Arauca, 2011, pág. 39).

Con lo anterior, el conflicto armado con sus actividades ilegales distorsionan las actividades económicas del departamento de Arauca, su competitividad, sus cadenas y apuestas productivas, su dinámica económica y afectaciones sociales que contraen en si en su accionar. Demostrando también lo que se mencionaba en párrafos anteriores, que el Estado en territorios con conflicto armado se enfoca en el despliegue militar para el control del territorio y el combate con los grupos armados al margen de la ley, siendo el conflicto el mayor discrepante para la seguridad de la ruralidad y el mantenimiento del medio rural.

Arauca ha vivido en los últimos años un proceso de mejoramiento de sus condiciones de seguridad, gracias a un mayor despliegue de la fuerza pública en distintos puntos del territorio. Sin embargo, el Departamento es aún percibido entre los inversionistas como un lugar riesgoso

para hacer negocios, hecho que perjudica significativamente su dinámica competitiva (Plan regional de competitividad del departamento de Arauca, 2011, pág.26).

El departamento de Arauca ha sido un punto estratégico para la actividad y financiación de estos grupos armados ya que el Estado no ejerce el total monopolio de la fuerza, y al ser zona de frontera permite las actividades ilegales como el contrabando, la extorsión principalmente a empresas petroleras, y el tráfico de drogas; adicional a esto, el Departamento cuenta con características geográficas que dificultan el ingreso de la fuerza pública por su terreno accidentado y montañoso.

... Los grupos armados ilegales de mayor presencia en el departamento de Arauca han sido las guerrillas de las FARC y el ELN, que además de contar con un fuerte poder militar mantenido por medio de la obtención de rentas de la extorsión a la industria petrolera y las posibilidades que ofrece el departamento al ser zona de frontera (el paso al Estado de Apure en Venezuela es utilizado como zona de retaguardia y permite ejercer control sobre actividades de contrabando) (Fundación Ideas para la paz, 2014, pág. 3).

Lo anterior demuestra las razones que motivan la concentración de las guerrillas como las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en el departamento de Arauca, donde ejercen control de las actividades económicas debido a su influencia sobre la población a través de su poder militar.

Por otro lado, en cuanto a seguridad ciudadana en el departamento de Arauca, los delitos de mayor ocurrencia a nivel Arauca que atentan contra la convivencia de la población son: Hurto (44%) y; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (25%) siendo delitos constantes, que atentan contra la población, pero que no han tenido el mayor control por parte de las autoridades locales, por la mayor trascendencia de las diferentes acciones de los grupos armados ilegales, debido a que tienen mayor afectación social (Subdirección De Responsabilidad Penal Arauca, 2016, pág. 7).

Adicionalmente, es constante la destrucción de infraestructura petrolera, energética, servicios públicos y demás, por parte de los grupos armados ilegales; situaciones que frenan los procesos económicos y perjudican significativamente, la dinámica competitiva del Departamento. Desde el análisis de las condiciones de seguridad y mantenimiento de la ruralidad, se articula el estudio para la ejecución del –PERS-Orinoquia, siendo una opción

para el desarrollo rural productivo, que con su implementación en el Departamento busca el mejoramiento de las condiciones de las cadenas productivas y el desarrollo de sus apuestas productivas con base en mayor progreso y competitividad; teniendo en cuenta la presente investigación como una base para los mismos, desde un enfoque rural, donde el –PERS-Orinoquia , propondría soluciones a comunidades vulnerables presentes en el territorio.

Así, para 2012 y 2013 los grupos guerrilleros contaron con una importante presencia en el Departamento, en particular en los municipios de Tame, Arauquita y Saravena, en donde realizaron de manera constante acciones como emboscadas, hostigamientos y ataques a la infraestructura petrolera y energética(Fundación Ideas para la paz, 2014, pág. 61).

Por consiguiente, los factores mencionados anteriormente dieron origen a la concentración de los grupos armados en el departamento de Arauca, su permanencia histórica y actual, y su incidencia de estos factores, en la dinámica económica y social del departamento. Así, el Plan de Energización Rural Sostenible -PERS-ORINOQUIA puede ayudar al mejoramiento de las condiciones del sector productivo y la competitividad del departamento; el desenvolvimiento de actividades económicas lícitas; la estabilidad de la población; el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado para ejecutar sus políticas sociales y económicas, que mejoren el nivel de vida de la población, favoreciendo el crecimiento económico, el desarrollo del departamento, y el medio rural.

Lo anterior, suscita la pregunta ¿Cuáles son las condiciones de seguridad y mantenimiento de la ruralidad en el departamento de Arauca?

Justificación

El presente informe tiene como finalidad contribuir a la formulación de un documento de base diagnóstica de la seguridad en relación a su influencia en el ámbito social, económico y cultural en el mantenimiento rural del Departamento de Arauca. Y que este sirva como insumo para la construcción de una estrategia de política pública aplicable en el territorio por el Ministerio de Minas y Energía, llevado al territorio de la Orinoquia en el Plan de Energización Rural Sostenible –PERS- ORINOQUIA para ser ejecutado por Observatorio de territorio de la Universidad de los Llanos.

Para el desarrollo económico de las comunidades rurales se hace pertinente la formulación de proyectos integrales y sostenibles, como lo pretende ser el PERS- ORINOQUÍA al intentar solucionar problemas de energización en el campo rural, siendo una opción que más allá de producir energía apoye el desarrollo rural productivo. Y en el contexto del PERS, es importante resaltar la influencia de la seguridad, en especial la resultante del conflicto armado ilegal en las áreas rurales de Colombia, para ser un complemento para la consolidación del plan.

Es pertinente que nosotros como futuros economistas trabajemos temas relacionados con el desarrollo productivo y la planificación de políticas públicas enfocadas a dar solución a las problemáticas concernientes a nuestro acervo teórico y conceptual. Además, es provechoso realizarlo para optar por el título de economista.

Objetivos

Objetivo general

Diagnosticar social, económica y culturalmente las condiciones de la seguridad como insumo para el Plan de Energización Rural Sostenible -PERS- ORINOQUÍA, y sus efectos en el mantenimiento rural del Departamento de Arauca.

Objetivos específicos

1. Identificar la dinámica poblacional a partir de la recopilación de información estadística de fuentes oficiales, y su relación con el comportamiento del conflicto armado del Departamento.
2. Construir un documento de base diagnóstica sobre las condiciones de seguridad y el mantenimiento de la ruralidad en el departamento de Arauca.
3. Medir la presencia del conflicto armado en el departamento de Arauca a través de la construcción de un indicador que determine la intensidad del conflicto armado en el territorio.

Marco teórico

Los fundamentos teóricos bajo los cuales se estructura el presente informe están determinados por la teoría política y el concepto de conflicto desde las distintas corrientes (funcionalista, conflictivista, marxista) del pensamiento. De aquellas corrientes, la que cimienta el argumento principal de este informe, es la funcionalista la cual define que toda sociedad se rige a partir de consensos y, al quebrantarlos, surge el conflicto, su respectiva resolución y la creación de nuevos consensos. Esta concepción es la base teórica de las actuales democracias liberales y los comportamientos de cada miembro de la sociedad (Arnoletto, 2013).

A continuación, el tema que converge con el conflicto y su influencia es el concepto de territorio, el cual se toma desde un aspecto geo-eco-antrópico, de esta forma, Sosa (2012) plantea una aproximación al concepto de territorio orientado hacia la relación sociedad-naturaleza.

La configuración del territorio se entiende a partir de su condición de marco de posibilidad concreta en el proceso de cambio de los grupos humanos. Sin embargo, también es el resultado de la representación, construcción y apropiación que del mismo realizan dichos grupos, así como de las relaciones que lo impactan en una simbiosis dialéctica en la cual tanto el territorio como el grupo humano se transforman en el recorrido histórico (pág. 7).

En este orden de ideas, el territorio deja de ser un espacio geográfico aislado de todo cambio, para ser un ente más complejo donde se involucran las relaciones entre los grupos sociales, el lugar de asentamiento y los recursos disponibles. En este caso, se hace evidente los elementos que involucra el territorio, los cuales para efectos de la investigación, se hará énfasis los elementos social, económico y cultural.

Desde una perspectiva social Sosa (2012) interpreta que “esa configuración de lo social, de las dinámicas y procesos al interior del territorio, donde son vitales las relaciones sociales. Las relaciones entre clases y estratos sociales, entre conglomerados étnicos, entre géneros, entre lo rural y lo urbano” (pág. 46-47). Asimismo, estas relaciones sociales entre distintos individuos y grupos meritan relaciones económicas entre la sociedad y el espacio geográfico.

Estos procesos y dinámicas encuentran su base no solamente en las condiciones geofísicas del territorio sino en el modo de producción y en sus concreciones territoriales. Esto es así porque el territorio puede entenderse como un ámbito o un escenario específico de producción, intercambio, distribución y consumo en el contexto de una formación social concreta que... su configuración económica responde y se apoya en un sistema de producción (Sosa, 2012, pág. 49).

Por otro lado, el territorio cumple una función cultural, de identidad y representativo del grupo social debido a que se hace parte del territorio y él hace parte de la cosmogonía del grupo social. Sosa (2012) expone la configuración cultural que presenta el territorio, puesto que “el territorio es una construcción social, histórica y cultural, producto de la apropiación de poderes y relaciones sobre sus múltiples contenidos y energías, lo cual se plasma en una representación espacial delimitada, al mismo tiempo que dinámica y móvil” (pág. 100).

Con la integración de los elementos que integran el territorio, se expone que este es flexible y sujeto a cambios, es allí donde el conflicto surge y se presentan situaciones adversas tanto en el ámbito social como económico. Por consiguiente, la siguiente teoría se fundamenta en la economía y su relación en el conflicto, denominada economía del conflicto, de la cual se hace énfasis en la economía política de la guerra definida por Pérez de Armiño, Areizaga & Vásquez (2000) a partir de las visiones de varios economistas neoclásicos (Keen, De Waal, Duffield). Estos autores reinterpretan los conflictos y los asocian a cambios en la estructura socioeconómica de una comunidad.

... Los conflictos no provocan una destrucción irracional de la sociedad y la economía, sino una reordenación de la primera mediante unas nuevas formas de poder (los señores de la guerra), y de la segunda mediante la citada economía política de la guerra. El conflicto es el mecanismo mediante el cual se configuran y expanden esas nuevas formas de poder y de economía política, que constituyen una respuesta al debilitamiento o colapso del Estado, y a la marginación y crisis económicas.

Con lo anterior, se busca poner de manifiesto los efectos del conflicto, tanto a nivel social como económico, en el departamento de Arauca y las estructuras socioculturales y económicas que surgen a partir del conflicto armado. Asimismo, se busca aportar a la reestructuración del aparato social y económico del departamento en el escenario del postconflicto.

Por consiguiente, dado que el objetivo central del presente informe estará centrado en el criterio de Seguridad y mantenimiento de la ruralidad de la dimensión Sociocultural y económica del proyecto del Plan de Energización Rural- PERS-ORINOQUIA en el departamento de Arauca, es necesario plantear algunos lineamientos que sirvan de ejes teóricos sobre los cuales sustentar la interpretación del criterio desde la dinámica poblacional y los factores de violencia que influyen en el usufructo de las apuestas productivas potenciales para el departamento de Arauca.

Para empezar, el tópico de seguridad rural ha sido objeto de estudio desde ámbitos internacionales y nacionales. En el primero, se estudia desde una perspectiva latinoamericana en países cuyos territorios han sido golpeados por la violencia y conformación de grupos armados ilegales. Tal es el caso de países Centroamericanos como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los cuales son objeto de estudio en el concepto de violencia política y social. Los autores determinan el contexto en el cual se encuentran los anteriores países.

La violencia antes mencionada forma parte de la realidad diaria de la vida, en especial en las comunidades pobres, traslapándose entre sí los diferentes tipos de violencia para formar un agregado múltiple y complejo de manifestaciones violentas. Este es en parte el legado directo de un conflicto civil violentamente opresivo y del hecho que, aunque se ha logrado la paz en términos del cese de hostilidades, la transición hacia sociedades más democráticas e igualitarias continúa siendo esquiva. También se debe a que el conflicto militar y la violencia política con frecuencia han sido reemplazados por un aumento en la violencia social y económica, acompañada por la erosión de las incipientes instituciones democráticas (Moser&Winton, 2002, pág. 8).

De forma similar, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha estudiado este fenómeno en Latinoamérica, donde define que durante las épocas de guerra civil en la región surgieron luchas entre la clase oligárquica dominante y las clases populares, desatando conflictos económicos, por la tierra y el poder político.

En la experiencia centroamericana, el poder de la oligarquía, al pretender la defensa de privilegios sociales y relaciones de dominación fundadas en un sistema autoritario, despliega la violencia empleada desde el Estado, ya que la dominación oligárquica es la expresión orgánica de la estructura socioeconómica, en donde es la tierra y no el capital, la que articula las

relaciones sociales. De ello, sólo la propiedad de la tierra otorga derechos políticos y civiles, de lo contrario, los canales de representación social son coartados (Wielandt, 2005, pág. 12).

Para dar un contexto de manera deductiva al objeto de análisis, los estudios realizados por diferentes instituciones del orden nacional, han conceptualizado la seguridad rural como algo más allá del simple control militar por parte del Estado en aquellos territorios marginados por el conflicto. Como lo exponen Bulla y Guarín (2015) “la seguridad se asimila con el control militar, mientras que las problemáticas de seguridad y convivencia que afronta la ciudadanía en su vida cotidiana no reciben la misma atención por parte de las autoridades” (pág. 3).

Con este concepto, la organización del Estado y su institucionalidad han sido reemplazadas en ciertas áreas donde los grupos armados ilegales actúan imponiendo sus propias instituciones que modifican la toma de decisiones y el comportamiento de los ciudadanos rurales. La anterior idea es tomada de Arias & Ibáñez (2012) que explican la incidencia directa e indirecta del conflicto y la presencia de los grupos armados ilegales.

El conflicto afecta la producción agrícola de los hogares de manera directa e indirecta. Los efectos directos surgen por acciones violentas de los grupos armados contra la población civil, mientras que los indirectos surgen debido a la incertidumbre que causa la presencia e imposición de reglas por parte de los grupos armados. Estos últimos efectos suceden incluso sin la incidencia de la violencia y los ataques propios del conflicto armado. Ello debido a que la simple presencia de los grupos armados genera un ambiente de incertidumbre y terror que conlleva cambios en el comportamiento de los individuos (pág. 3).

Con el anterior planteamiento, se revela que el conflicto armado y la presencia de grupos armados ilegales, no solo afecta en el ámbito político y social, sino que además, hace mella en las actividades económicas de una región hasta llegar a afectar la economía nacional, debido que genera incertidumbre para la inversión privada en aquellas regiones inmersas en el conflicto. Asimismo, el Estado, por medio de su política nacional de seguridad, interviene en aquellas regiones para tomar control militar.

El Estado en el uso legítimo de sus facultades, interviene por medio de la política de seguridad en aquellas regiones, como se menciona anteriormente. Para que esta política tenga una mejor efectividad, se formulan e implementan planes en la lucha contra los grupos armados y sus actividades ilícitas como el Plan de Consolidación integral la Macarena

(PCIM) que el gobierno Colombiano implementó en el 2007, el cual se instauró en seis municipios del departamento del Meta: La Macarena, La Uribe, Mesetas, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vistahermosa.

El programa busca como objetivo lograr una presencia integral y permanente del Estado en la zona con el fin de prestar las condiciones necesarias para: (i) recuperar el control institucional del territorio y el restablecimiento de la seguridad; (ii) alcanzar la gobernabilidad local y la efectiva participación ciudadana; (iii) erradicar los cultivos ilícitos y desarrollar la economía lícita; (iv) recuperar los Parques Nacionales Naturales; y (v) lograr el acceso a la justicia y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos (Mejía & Uribe & Ibáñez, 2011, pág. 22).

Donde las fases para lograr dichos objetivos fueron: Primero recuperación, que consiste en recuperar el control de la seguridad en las zonas con presencia de grupos armados y con débil institucionalidad del Estado; Segunda fase Transición, la cual se basa en controlar militarmente la zona para una instalación permanente del Estado; por último Estabilización, consolidar la presencia permanente de todos los niveles del Estado para garantizar bienestar social y económico. Observándose que el plan fue todo un éxito ya que tuvo resultados a corto plazo:

En cuanto a la recuperación del control territorial por parte del Estado, ha disminuido la tasa de homicidios en la zona de forma más acelerada que en el resto del territorio nacional. Además, los secuestros y los enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley y la fuerza pública han disminuido. Esto acompañado de un aumento de guerrilleros que han desertado y del número de secuestrados que han sido rescatados. En cuanto a condiciones socioeconómicas, han mejorado algunos indicadores sociales como la desigualdad de la tierra, y la cobertura de educación y salud. Adicionalmente, ha mejorado el acceso a la justicia por la llegada de jueces a la zona, sumado a una mayor protección a los derechos humanos. Sin embargo, quedan aún retos importantes en este campo. La inversión, principalmente en infraestructura, ha aumentado, lo cual implica mayor conectividad de la zona con otras regiones del país, mejorando así el acceso a mercados para los productos lícitos, mejores instalaciones educativas y para atención en salud (Mejía, Uribe & Ibáñez, 2011, pág. 59).

Aunque en el departamento de Arauca no se ha formulado ni ejecutado un plan similar, se toma la experiencia en la implementación de planes para la seguridad rural como el PCIM, observándose que para mejorar las condiciones socioeconómicas de un departamento como Arauca afectado por el conflicto armado, se debe primeramente implementar una política de seguridad para poder controlar el territorio, que está da paso a establecer una gobernabilidad local, y está da impulso al mejoramiento de la condición básica de la población, a su convivencia y al desarrollo económico del territorio. Evidenciándose, que la seguridad pública es la base para articular el resto de políticas públicas que buscan la integración en materia social, económica y cultural de la población, por ende se logrará un crecimiento y un desarrollo de la comunidad.

Marco conceptual

Territorio: Es el espacio geográfico dominado por una estructura social de poder, donde se relacionan el espacio físico (área y recursos) y el espacio inmaterial (pensamientos, conceptos, ideologías) que se transforman continuamente entre sí (Mançano, 2013).

Orden Social: Estructura social entendida como mantenimiento de la jerarquía, las normas y las instituciones aceptadas socialmente mediante el consenso social.

Seguridad pública: Busca la defensa del orden público estatal, frente a un enemigo interno (amenaza) y tiene un marco institucional con características represivas (policía, justicia y cárcel) (Carrión & Dammert, 2009, pág. 10).

Seguridad ciudadana: Se refiere a la necesidad de mantener y potenciar las relaciones interpersonales en el marco de la ley y la cultura, expresadas en el respeto al derecho ajeno bajo la norma, para lo cual tiene presencia un conjunto de instituciones públicas (municipio, justicia, cárcel) y sociales (universidad, medios de comunicación, defensores de derechos humanos) (Carrión & Dammert, 2009, pág. 10).

Ruralidad: La importancia de la ruralidad desde la perspectiva del territorio y de las múltiples interrelaciones que se dan en diversos planos, entre ellas las actividades agrícolas y no agrícolas, entre lo rural y lo urbano, entre lo social, lo económico y lo ecológico (Trejos, 2012, pág. 16).

Plantea la necesidad de definir políticas sobre la concepción, las estrategias y las prioridades del desarrollo nacional, regional y local teniendo en cuenta las implicaciones con la cadena agro-productiva-comercial y lo rural y los relacionamientos con los programas y políticas de reformas económicas, reformas del Estado, políticas macroeconómicas, y otras que inciden en la ruralidad (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2000, pág. 11).

Conflicto: Siempre que tienen lugar actividades incompatibles, pudiendo consistir esa incompatibilidad en prevenir, obstruir, interferir, perjudicar, o de algún modo hacer menos probable o menos efectiva la acción de uno a través de la del otro (Ortego, López & Álvarez, 2012, pág. 3).

Grupos armados ilegales: Aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (Ley 782, 2002).

Migración: Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. (Por ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo) (Organización Internacional para las Migraciones, 2006, pág. 39).

Desplazamiento: Traslado forzoso de una persona de su hogar o país debido, por lo general, a conflictos armados o desastres naturales (Organización Internacional para las Migraciones, 2006, pág. 20).

Institucionalidad: Las instituciones crean elementos de orden y predictibilidad en la acción de los actores políticos. La traducción de estas estructuras políticas en acción política y continuidad es generada por procesos rutinarios y comprensivos. Estos producen modos de acción repetidos y patrones organizacionales (Blondel citado por Urcuyo, 2010; pág. 22).

Institución: Son las reglas de juego de una sociedad o, formalmente, las limitaciones ideadas que estructuran las relaciones humanas. Aquellas consisten en reglas formales (constituciones, estatutos, leyes y regulaciones), reglas informales (Convenios, reglas morales y normas sociales) y la aplicación de sus características. Porque constituyen la estructura de incentivos de una sociedad, y definen la manera de dirigir el juego a través del tiempo (Mantzavinos, North & Shariq; 2003; pág. 7).

Entidad: Colectividad considerada como unidad, y, en especial, cualquier corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica (Real Academia Española, 2014).

Desarrollo rural sostenible: Proceso de transformación de las sociedades rurales y sus unidades territoriales, centrado en las personas, participativo, con políticas específicas dirigidas a la superación de los desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de género, que buscan ampliar las oportunidades de desarrollo humano (Trejos, 2012, pág. 20).

Diseño metodológico

Para la realización de la investigación, se cuenta con una fase preliminar en la que se definen los conceptos y su extensión. De igual manera, se dispone a realizar una búsqueda de las fuentes secundarias a analizar y el calendario de ejecución.

Para el manejo de las fuentes secundarias de información, se construye una matriz bibliográfica en la cual se clasifican y sintetizan las fuentes secundarias obtenidas acorde a los conceptos de seguridad y mantenimiento de la ruralidad. Con la matriz bibliografía se busca organizar la información a partir de los siguientes criterios:

a. *Concepto analizado.* Es decir, si se tratan de fuentes que estudian la seguridad y la ruralidad de manera general o específica.

b. *Alcance.* Con el propósito de dirigir y coordinar las fuentes secundarias en coherencia con los objetivos, se delimitan las fuentes de alcance nacional y/o regional.

En el caso de las fuentes de alcance nacional, se acogen algunas de acuerdo a los objetivos de la investigación. Sin embargo, la profundización en las misma ocasiona generalidades y sobredimensionada la búsqueda y la delimitación de las mismas. No obstante, estas fuentes son de mayor número.

Las fuentes de alcance regional permiten la contextualización de la seguridad y el mantenimiento de la ruralidad en el departamento de Arauca y la región de la Orinoquía. De igual manera, se identifica las dinámicas dentro del territorio que difieren de las dinámicas nacionales.

c. *Actores o agentes.* Este criterio enfoca los grupos afectados y que afectan la seguridad y el mantenimiento del territorio rural. Pueden ser grupos sociales o económicos debido al análisis de la población en su entorno sociocultural y económico.

d. *Año de publicación.* Este criterio se ajusta en el marco de una actualización y determinar lo actualizada de la información. Esto permite descartar fuentes que no obedezcan a las dinámicas más recientes, puesto que las condiciones sociales, culturales y económicas se modifican con el tiempo.

Teniendo en cuenta la fase preliminar de búsqueda y consulta de fuentes secundarias, se procede a exponer la elaboración del diagnóstico con base en los siguientes criterios.

- a. En la población afectada por los defectos de la seguridad y los efectos sobre el mantenimiento de la ruralidad.
- b. Los grupos que influyen en la seguridad y el mantenimiento de la ruralidad.
- c. Las apuestas productivas afectadas por los defectos de la seguridad en el entorno rural.

Para el cumplimiento del tercer objetivo, se aplica una metodología diferente al anterior puesto que se busca medir la influencia del conflicto. La metodología parte del proceso jerárquico analítico (AHP por sus siglas en inglés), planteado por Saaty en 1980, el cual consiste en la complejidad que presentan los problemas al momento de tomar decisiones con múltiples criterios y busca crear soluciones a través de la priorización de los problemas propuestos (Saaty, citado por Garavito, 2014).

Esta metodología consiste en abordar un problema que presenta múltiples criterios, actores y situaciones, para optimizar la toma de decisiones. En este caso, se construye un modelo de jerarquía cuyo vértice será el principal objetivo, correspondiente al problema a resolver. El siguiente nivel corresponde a los criterios, los cuales se pueden estructurar en jerarquía, dependiendo del grado de complejidad del objetivo o meta a lograr.

El siguiente paso corresponde a la comparación entre criterios pares, lo cual determinará el grado de prioridad con relación al objetivo cuspide. De esta manera, se realiza una valoración relativa para determinar la relación directa entre criterio-objetivo que permita tomar una decisión.

La última característica corresponde a la propiedad de la reciprocidad en la información. Esto es, para un mismo criterio puede aplicar varias alternativas o viceversa, para varios criterios una solución, a pesar de que la información es definida como redundante y más o menos inconsistente. En consecuencia, los juicios de valor se minimizan al igual que el tiempo para tomar las decisiones. No obstante, la redundancia puede ser positiva en la medida que nutre los juicios y al final, permite la reducción de errores.

Por otro lado, se plantea la construcción de un indicador a partir de variables cualitativas relacionadas con el conflicto armado en el departamento de Arauca. Se aplica un modelo de variables policótomas para determinar la intensidad del conflicto armado en el departamento.

Cronograma

Actividad/semana	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5			
Revisión bibliográfica	■	■	■	■																
Construcción de marco conceptual			■	■																
Construcción de la propuesta					■	■														
Sistematización de la información						■	■	■												
Análisis de la información							■	■	■											
Diagnóstico del departamento									■	■	■									
Redacción del informe final													■	■	■					
Corrección del informe															■	■				
Construcción del artículo publicable																		■	■	
Sustentación del informe																				■

Fuente: Aguirre & Perico (2016).

Presupuesto

Producto		Canti dad	Costo unitario	Costo total
			\$	\$
Equipos	Computadora	2	990.000	1.980.000
	Memoria flash		\$	\$
	8 GB	2	15.000	30.000
			\$	\$
Papele ría	Carpetas	4	4.000	16.000
			\$	\$
	Fotocopias	550	50	27.500
Transp orte	Desplazamien to	60	\$	\$
			1.700	102.000
			\$	\$
	Total		1.010.750	2.087.500

Fuente: Aguirre & Perico (2016).

Productos a entregar

Destino	Categoría de producto	Producto
Observatorio	Matrices	Matriz de identificación de apuestas productivas para el departamento de Arauca Matriz bibliográfica
	Documentos	Documento de base diagnóstica con enfoque en la seguridad y mantenimiento de la ruralidad
	Indicadores	Indicador sobre la intensidad del conflicto armado en el departamento
Programa de economía	Requisitos de grado	Informe final Artículo publicable

Fuente: Aguirre & Perico (2016).

Referencias

- Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2001-2016). *Situación Colombia: ACNUR*. (Organización de las Naciones Unidas) Recuperado el septiembre de 2016, de ACNUR Web site: <http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/colombia/>
- Arias, M., & Ibáñez, A. (noviembre de 2012). Conflicto armado en Colombia y producción agrícola: ¿aprenden los pequeños productores a vivir en medio del conflicto? *Documento CEDE* (44), 38. Recuperado el octubre de 2016, de https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2012-44.pdf
- Arnoletto, E. (2013). Los conflictos en los procesos sociales. 136. Córdoba, Argentina: Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso. Recuperado el octubre de 2016, de <http://www.eumed.net/libros-gratis/2013b/1346/1346.pdf>
- Bulla, P., & Guarín, S. (2015). *Seguridad Rural en Colombia: Una oportunidad para la consolidación del Estado*. Fundación Ideas para la Paz. Bogotá D. C.: Fundación Ideas para la paz. Recuperado el julio de 2016, de <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/55e0c4e3e93c2.pdf>
- Carrión, F. (2009). Barajar y dar de nuevo: hacia una nueva comprensión de la violencia y la seguridad. En F. Carrión, & M. Dammert, *Economía política de la seguridad ciudadana* (Primera ed., págs. 9-36). Quito, Ecuador: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Recuperado el octubre de 2016, de <http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/110976-opac>
- El País. (8 de mayo de 2014). “El conflicto armado destruye la prosperidad económica”: Michael Porter. (Economía). Cali: El País S. A. Recuperado el octubre de 2016, de El País.com.co: <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/michael-porter-conflicto-armado-destruye-prosperidad-economica>
- Fundación Ideas para la Paz. (30 de abril de 2008). El Bloque Vencedores de Arauca. *Revista Semana*. Recuperado el octubre de 2016, de <http://www.semana.com/online/articulo/el-bloque-vencedores-arauca/92458-3>

- Garavito, E. (19 de febrero de 2014). *Curso de Diseño de Sistemas Productivos: AHP*. Recuperado el octubre de 2016, de Universidad Industrial de Santander: <http://gavilan.uis.edu.co/~garavito/docencia/asignatura1/>
- Gobernación de Arauca; Comisión Regional de Competitividad de Arauca. (24 de marzo de 2011). Plan Regional de Competitividad del departamento de Arauca. 74. Arauca, Colombia: Universidad del Rosario. Recuperado el octubre de 2016, de http://ccarauca.org/data/archivos/temporal/plan_regional__de_competitividad_de_arauca.pdf
- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2001). *Nueva Ruralidad: el desarrollo rural sostenible en el marco de una nueva lectura de la ruralidad*. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D. C.: Publicaciones Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el octubre de 2016, de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/rjave/paneles/urra.pdf>
- Mançano, B. (enero-junio de 2013). Territorios: teoría y disputas por el desarrollo rural. 116-133. (E. San Marful, Trad.) La Habana, Cuba: Centro de Estudios Demográficos. Recuperado el octubre de 2016, de <http://www.cedem.uh.cu/sites/default/files/116-133.pdf>
- Mantzavinos, C., North, D., & Shariq, S. (diciembre de 2003). Learning, Institutions and Economic Performance. *Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods*, 19. Recuperado el octubre de 2016, de http://www.coll.mpg.de/pdf_dat/2003_13online.pdf
- Mejía, D., Uribe, M., & Ibáñez, A. (marzo de 2011). Una Evaluación del Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM). *Documentos CEDE*(13), 65. Recuperado el octubre de 2016, de https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2011-13.pdf
- Migraciones, O. I. (2006). Glosario sobre migración. *Derecho Internacional sobre Migración*, 88. Recuperado el octubre de 2016, de http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf
- Moser, C., & Winton, A. (2002). *Violencia en la Región de América Central: Hacia un Marco de Referencia Integrado para la Reducción de la Violencia*. OverseasDevelopmentInstitute. London: Publicaciones OverseasDevelopmentInstitute. Recuperado el octubre de 2016, de

<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3003.pdf>

Ortego, M., López, S., & Álvarez, M. (23 de noviembre de 2012). *Ciencias Psicosociales*.

Recuperado el octubre de 2016, de Universidad Incca de Colombia:

<https://www.unincca.edu.co/permanencia/resolucionconflictos/documentos/01.pdf>

Pérez de Armiño, K., Areizaga, M., & Vásquez, N. (2000). Diccionario de Acción

Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Recuperado el octubre de 2016, de Hegoa,

Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional:

<http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/39>

República de Colombia. (23 de diciembre de 2002). Ley 782. Bogotá D. C., Colombia: Diario

Oficial. Recuperado el octubre de 2016, de

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6677>

Revista Semana. (11 de mayo de 2012). Colombia, el país suramericano que más gasta en armamento. *Semana*. Recuperado el octubre de 2016, de

<http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-segundo-pais-suramericano-mas-gasta-armamento/257797-3>

Sánchez, F., & Díaz, A. (octubre de 2005). Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social colombiano, 1990-2002. *Documentos CEDE* (58), 1-76. Recuperado el

septiembre de 2016, de

https://economia.uniandes.edu.co/assets/archivos/Documentos_CEDE/d2005-58.pdf

Sosa, M. (2012). ¿Cómo entender el territorio? (Primera ed., Vol. 1). (B. Ramos, Ed.)

Guatemala, Guatemala: Cara Parens de la Universidad Rafael Landívar.

Trejos, R. (26 de junio de 2012). Nueva ruralidad. Temas emergentes, nuevos condicionantes

y viejos problemas. *Perspectivas rurales* (8), 7-28. Recuperado el octubre de 2016,

de <http://revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales/article/view/3542/3399>

United States Agency International Development, Organización Internacional para las

Migraciones, Fundación Ideas para la Paz. (2014). *Dinámicas de conflicto armado en*

Arauca y su impacto humanitario. Fundación Ideas para la Paz. Bogotá D. C.:

Publicaciones Fundación Ideas para la Paz. Recuperado el octubre de 2016, de

<http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53e2ac3725816.pdf>

Urcuyo, C. (2010). *Reflexiones sobre institucionalidad y gobernabilidad democrática. Una*

visión desde el contexto centroamericano. Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales. San José: Publicaciones FLACSO. Recuperado el octubre de 2016, de

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0617/Reflexiones_sobre_Institucionalidad_y_Gobernabilidad.pdf

Wielandt, G. (2005). *Hacia la construcción de lecciones del posconflicto en América Latina y el Caribe. Una mirada a la violencia juvenil en Centroamérica*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas. Recuperado el octubre de 2016, de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6120/1/S051050_es.pdf